



Rendición de cuentas: Una política económica distinta que generó mayor empleo, aumentó los salarios y bajó los impuestos

El equipo económico del gobierno presentó el proyecto de Rendición de cuentas 2023 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Por tratarse del último proyecto de Rendición de cuentas que presenta este equipo económico, las autoridades expusieron sobre los resultados del 2023, e hicieron un repaso de la política económica que comenzó a aplicarse en 2020, que permitió generar más empleo, aumentar el salario y bajar los impuestos.

Las autoridades demostraron que la gestión económica de la actual administración difiere de la anterior en lo que respecta a mejoras en el plano fiscal, laboral, monetario, manejo de las empresas públicas, e implementación de reformas estructurales, como por ejemplo la de seguridad social.

A esta administración le tocó atravesar una serie de situaciones adversas (pandemia, aumento de precios por invasión de Rusia a Ucrania, diferencia cambiaria con Argentina, la mayor sequía un siglo y luego inundaciones), que tuvieron un impacto social, económico y sanitario, en el entorno de 4000 millones de dólares, equivalente a 4,9% del PIB, entre mayores gastos y caída de la recaudación.

A pesar de esos inconvenientes, el gobierno actual alcanzó la mejor calificación crediticia de su historia y el riesgo país más bajo, indicadores que demuestran la confianza de los inversores tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyos sociales

En todo momento el gobierno apoyó a los diferentes sectores, en especial a los más vulnerables, y desde el inicio mantuvo los motores de la economía en funcionamiento, a pesar de los pedidos de algunos sectores de la oposición que reclamaban una cuarentena con paralización de actividades.

Además de esas medidas específicas para hacer frente a las situaciones adversas, este gobierno hizo una fuerte apuesta a atender situaciones de vulnerabilidad social, entre las que se destacan:

- 50 millones de dólares anuales destinados para la primera infancia.

- Más de 200 millones de dólares adicionales para la mejora de asentamientos.
- Aumento de transferencias sociales para sectores más vulnerables, que en 2023 se incrementaron en un 32% real con respecto a 2019 (cerca de USD 100 millones de dólares).

Empleo y salario

Desde el inicio de esta administración, el gobierno de coalición dejó en claro que la prioridad de la política económica era la generación de puestos de trabajo. Los números de estos cuatro años son elocuentes:

- Se crearon más de 76.100 empleos.
- Eso significa que se recuperaron los trabajos destruidos durante la pandemia y los 52.000 empleos perdidos durante la administración anterior.
- El empleo continúa creciendo en 2024, y se espera que se sumen otros 25.000 ocupados netos en promedio este año respecto de 2023, lo que totaliza 100.000 en el período.

En lo que tiene que ver con el salario, la recuperación comenzó luego de la pandemia y desde fines del año pasado se encuentra en niveles superiores a los de 2019, medido punta a punta.

Este proceso de recuperación del salario real continúa durante 2024, año en el que acumula 3,7% de incremento real interanual a mayo. La masa salarial, que une el empleo y el salario real, se encuentra en un nivel récord de los últimos años.

Gasto público

Esta administración cumplió con el compromiso de moderar el aumento de gasto público, pero sin descuidar las urgencias que surgieron a lo largo de estos años. Esta forma de manejar los recursos públicos permitió mejorar las cuentas fiscales y romper con la lógica administraciones anteriores, que aumentaron el déficit fiscal como consecuencia de decisiones adoptadas sin previsión y sin orden en el uso del dinero de toda la sociedad.

En el gobierno anterior se gastó más dinero del que ingresó. Entre 2015 y 2019 los ingresos subieron 0,7% del PIB mientras que los egresos subieron tres veces más, es decir, 2,1% del PIB. En estos cuatro años, los ingresos aumentaron 0,9% del PIB y tuvo



la disciplina de subir los gastos la tercera parte de lo que subieron los ingresos: 0,3% del PIB.

Ese buen manejo del dinero público permitió a este gobierno de coalición cumplir con un compromiso de campaña: bajar los impuestos. A pesar de que había voces que sostenían que no sería posible bajar impuestos, e incluso argumentaban que era necesario aumentar la carga tributaria, esta administración demostró que sí se podía hacer. Se bajaron los impuestos a pesar de que se recibió el país en una situación fiscal muy frágil, que se vio potenciada a los pocos días de asumir con la pandemia. Hoy más de 80 mil trabajadores, jubilados y pensionistas dejaron de pagar IRPF y IASS; más de 500 mil trabajadores y pasivos pagan menos; y 35 mil micro y pequeñas empresas aportan menos tributos.

Esa rebaja impositiva constituye un quiebre en la historia reciente de nuestro país, porque hasta ahora el aumento del gasto público se financiaba con más impuestos, como se hizo con el ajuste fiscal de 2017 (aumento de IRPF al trabajo, IASS, impuesto juegos azar, aumento de la tasa consular, entre otros).

En lo que respecta a la deuda pública, este gobierno logró estabilizarla luego de que esta aumentara, como sucedió en todo el mundo por consecuencia de la pandemia. La asignación de recursos para áreas prioritarias y los mayores gastos para enfrentar las distintas crisis, se hizo de forma ordenada, prudente y focalizada. No se siguió el camino que pedía la oposición de gastar sin un criterio responsable. Prueba de ellos es que hoy la deuda soberana tiene la mejor calificación crediticia en su historia.

Inflación

El aumento salarial se vio reforzado por el nuevo marco de política monetaria impulsada por Banco Central (BCU), que se centró en la estabilidad de precios.

Esa política determinó que el dato de inflación al final de 2023 alcanzó el menor nivel en los últimos 18 años (5,1%), contribuyendo así con el aumento del poder de compra de salarios, jubilaciones y otros ingresos de los hogares uruguayos.

Si se observa el dato a agosto de 2024 (5,57%), la inflación se ubica en el rango meta por quince meses consecutivos y, según proyecta el BCU, se mantendrá en torno al centro del rango durante los próximos 24 meses (4,5%).

Empresas públicas

En lo que respecta a las empresas públicas, se trabajó en la mejora de la gestión, con el objetivo de generar ganancias de eficiencia y mejoras en la cobertura y calidad de los servicios que prestan a la población.

El resultado fue una disminución real en los niveles tarifarios: 10.2% en UTE, 14% en ANTEL y 1.7% en OSE entre 2020 y 2024 (datos a enero). En el caso de los combustibles, la Ley de Urgente Consideración, modificó el criterio de fijación de los precios de venta, de forma de reflejar su costo de importación (PPI). Con esa medida, se dejó atrás la política anterior de aumentar los costos para subsanar las ineficiencias de gestión; lo que permitió también mejorar la competitividad del sector privado.

Otras acciones concretas hacia el futuro

Durante estos cuatro años, incluso desde el inicio de la pandemia, este gobierno mantuvo la decisión de continuar con las luces largas encendidas. De esa manera, mientras atendía las urgencias, continuaba adelante con una serie de reformas y planes de mediano y largo plazo, mucho de los cuales se venían reclamando desde hacía años desde distintos sectores. A modo de ejemplo, entre ellas se destacan:

- Regla fiscal.
- Reforma de la seguridad social.
- Inversión récord en infraestructura que permitió mejorar el estado de las rutas en todo el país.
- Abordaje ambiental de la política económica.
- Estrategia proactiva en la apertura comercial para facilitar acceso a los mercados a los productos uruguayos.

Todo esto demuestra que Uruguay se encuentra hoy en una situación mejor que en 2019. El modelo económico llevado adelante por este gobierno generó más empleo, aumentó el salario, bajó impuestos, redujo la inflación, incrementó la inversión en infraestructura y vivienda, y destinó más recursos a políticas sociales, seguridad, educación y salud.

Montevideo, 5 de setiembre de 2024.